

HEVETH FERNANDO TORRES OREJUELA
Juez 18 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI
E-MAIL: of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
E. S. D.

Referencia: Proceso No.76001-33-33-018-2022-00212-00
Demandante: JORGE ASNDRES ALVAREZ LOPEZ.
Demandado: Municipio de Santiago de Cali- Secretaria de Movilidad y Policia Nacional
Medio de Control: Reparación Directa
Buzón Electrónico: Demandante: gomezmjy@yahoo.com
Asunto: Contestación demanda, poder y antecedentes administrativos

LUZ MARY GONZALEZ AGUIRRE, mayor de edad, vecina de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía No.31.940.570 de Cali Valle, con Tarjeta profesional No. 123826 del C.S.J., obrando en calidad de apoderada del Municipio de Santiago de Cali, conforme a poder que adjunto, por medio del presente escrito procedo a pronunciarme respecto a la demanda formulada en el asunto, de la siguiente manera:

1.- PRONUNCIAMIENTO EXPRESO SOBRE LAS PRETENSIONES:

Me opongo a que el Distrito de Santiago de Cali, sea responsable de que el Sr. MAURICIO ALVAREZ LÓPEZ mayor, domiciliado en Cali, identificado con C. C. No.1.130.614.580, fue derribado de su motocicleta en movimiento, agredido de manera injustificada, y se omitió prestarle atención básica de primeros auxilios y remitirlo a un centro asistencial, agresión que fue cometida por agentes de la Policía Nacional y agentes de Tránsito de la Secretaria de Movilidad de la Alcaldía de Cali.

Me opongo a que se Declare que en virtud de los hechos mencionados anteriormente, consistentes en presuntas agresiones físicas, omisión de ayuda, negligencia, se le generó heridas físicas, afectaciones psicológicas, daños y pérdidas de pertenencias personales.

Me opongo a que producto del anterior suceso, se generaron los siguientes presuntos daños a su cliente el señor ALVAREZ LÓPEZ, ha quedado con una cicatriz en su cabeza, y afectaciones psicológicas que han requerido de tratamiento profesional por parte de los agentes de movilidad.

Me opongo a que las entidades demandadas Distrito de Santiago de Cali, por las presuntas agresiones injustificadas que sus agentes desplegaron sobre mi cliente, deben indemnizar al señor ALVAREZ LOPEZ por los daños descritos causados.

En general me opongo a todas y cada una de las pretensiones en el escrito de la demanda, por las razones que expongo en el acápite de FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO DE LA DEFENSA.

PRONUNCIAMIENTO EXPRESO FRENTE ALOS HECHOS:

EL HECHO PRIMERO. NO ME CONSTA, me atengo a lo probado y demostrado en el transcurso del proceso.

EL HECHO SEGUNDO: NO ME CONSTA, me atengo a lo probado y demostrado en el transcurso del proceso.

EL HECHO TERCERO: NO ME CONSTA, me atengo a lo probado y demostrado en el transcurso del proceso.

EL HECHO CUARTO: NO ME CONSTA, me atengo a lo probado y demostrado en el transcurso del proceso.

EL HECHO QUINTO, SEXTO, SEPTIMO, OCTAVO, NOVENO Y DECIMO: NO ME CONSTA, me atengo a lo probado y demostrado en el transcurso del proceso.

EL HECHO DECIMO PRIMERO: NO ME CONSTA, me atengo a lo probado y demostrado en el transcurso del proceso, toda vez que no hay historia clínica. Que lo pruebe como ocurrieron las lesiones.

EL HECHO DECIMO SEGUNDO: ES CIERTO representa lo surtido en un proceso policivo.

EL HECHO DECIMO TERCERO: NO ME CONSTA, me atengo a lo probado y demostrado en el transcurso del proceso.

4.- OPOSICION A LAS PRUEBAS SOLICITADAS:

Interrogatorio de parte:

Su señoría es de tener en cuenta que para la parte actora era su deber y responsabilidad aportar todas las pruebas al plenario, en este sentido pretender interrogatorio de parte encaminado a constituir pruebas de las cuales no cuenta y que pretende constituir con dicho interrogatorio de parte el que debía procurar con antelación, contra el expreso mandato legal que le asignaba dicha responsabilidad de aportarlas.

Así las cosas, solicito respetuosamente que se niegue la práctica de interrogatorio de parte contra los agentes de tránsito del Distrito Especial de Santiago de Cali.

LA CARGA PROBATORIA BAJO EL PRINCIPIO DISPOSITIVO

El proceso judicial en su faceta probatoria es, en esencia, una actividad de reconstrucción de hechos, cuya demostración permite encuadrarlos o subsumirlos en el supuesto de las normas, para aplicar los efectos jurídicos que en las mismas se consagran y solucionar así una determinada controversia. De ahí que, excepto en los conflictos de puro derecho, la prueba tiene una importancia vital, de manera que, si el

proceso es regido por el principio dispositivo, las partes deben llevar al juez los elementos de convicción de los hechos que afirman, para sustentar el derecho pretendido o para oponerse al mismo; o, en cambio, si se trata de un proceso regido por el principio inquisitivo, la iniciativa probatoria no está a cargo de éstas (las partes) y será entonces el juez quien debe ejercer una amplia investigación de los hechos materia del proceso.

Luego de un amplio debate en relación con estos principios y su incidencia en materia contencioso administrativa, en el inciso final del artículo 103, que regula el objeto y principios de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, expresamente se estableció que:

“Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código.”

Es decir, la reforma se inclinó por el **principio dispositivo** para la impulsión del proceso contencioso administrativo y el debate probatorio, o sea, que la parte que alega el hecho y reclama el derecho o se opone a él está obligada a suministrar la prueba (art. 177 C.P.C), aunque conservando -como es la tendencia del derecho procesal moderno- elementos del sistema inquisitivo, tales como el poder para decretar pruebas de oficio en primera y segunda instancia. En tal virtud, la tarea investigativa se deja, en principio, a las partes, sin perjuicio de que, excepcionalmente, el juez cuando sea estrictamente necesario decreta de oficio las pruebas que demanden la efectividad de los derechos de las partes, la justicia y la defensa del orden jurídico.

Otra cuestión que en esta materia resolvió la comisión de reforma, es si debía implementarse la **figura de la carga dinámica de la prueba en Colombia**, como sucede en algunos países como España y Argentina y como en algún tiempo la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado la aplicó para casos de responsabilidad por daños producidos con ocasión de la actividad médica. Se propuso, a los inicios de la discusión, si era pertinente regular esta figura con el ánimo de morigerar la carga probatoria que incumbe a las partes, cuando quiera que una de ellas está en mejor posición de probar, sea por superioridad técnica, o dado sus conocimientos especiales, o porque se encontraba en su esfera jurídica la producción de la prueba y, por consiguiente, la otra en una situación de dificultad razonable para aportar la prueba. Como se sabe, se trata de un sistema de redistribución de la carga procesal o de inversión de la carga, en la que en las condiciones anotadas, el juez traslada al inicio del litigio la obligación de demostrar la verdad de lo alegado a la contraparte de acuerdo con el juicio sobre la mejor posibilidad de su aporte y con independencia de quien haya alegado el hecho dentro del proceso. Sin embargo, la comisión no estuvo de acuerdo con implementar la carga dinámica de la prueba, considerando que no es posible conjugarla con los principios de igualdad, debido proceso y derecho de defensa.

5.- FUNDAMENTOS FACTICA Y JURIDICA DE LA DEFENSA

El Distrito de Santiago de Cali-Secretaría de Seguridad y Justicia, no ha incurrido en responsabilidad alguna a través de los presuntos hechos narrados en la demanda porque no está probado que el daño antijurídico sufrido por el señor JORGE ANDRES ALVAREZ LOPEZ haya obedecido a acción u omisión de la Administración Distrital, como quedará demostrado de acuerdo a las siguientes precisiones de orden jurídico.

Pues bien, analizado el escrito de la demanda y los documentos arrimados al plenario, se advierte que no están plenamente demostrados, de un lado, los presupuestos facticos que configuran la responsabilidad patrimonial de la administración, y de otro lado. Este punto los abordaré enseguida.

5.1.- LA FALTA DE DEMOSTRACION DE LOS PRESUPUESTOS FACTICOS QUE CONFIGURAN LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACION:

a) EL DAÑO ANTIJURIDICO:

Para el Consejo de Estado Colombiano¹, el daño antijurídico “equivale a la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en la obligación de soportar” ello porque no existe título jurídico válido alguno que legitime a la Administración para causar dicho daño.

Mientras que la responsabilidad contractual, serán títulos jurídicos de imputación. Por ejemplo los mandatos de la buena fe, la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza los contratos conmutativos (Ley 80 de 1993, art.28) en la responsabilidad extracontractual lo serán, además la falla del servicio que es la imputación más frecuente, cualquiera que sea el sistema que para su prueba se adopte; la culpa personal en nexos con el servicio, prevista verbigracia en el inciso segundo del artículo 90 de la C.P.; la igualdad de las personas ante la ley (art.13 de la C.P. entre otros); el riesgo excepcional establecido, por ejemplo por la ley 104 de 1993 o en el Decreto 444 del mismo año; el error judicial y el anormal funcionamiento de la administración de justicia (Art.40 del C.P, ART.414 del C.P.P) ETC), la inconstitucionalidad de la ley declarada judicialmente, y principios de justicia y equidad como el no enriquecimiento sin causa.

Así las cosas su señoría, el Distrito Especial de Santiago de Cali no tiene la responsabilidad de proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. En este caso es La Policía Nacional encargada de esta protección la llamada a responder en caso de que se considere que las pretensiones invocadas tienen vocación de prosperidad.

“El artículo 1 de la Ley 62 de 1993, en consonancia con los artículos 2 y 218 CN, dispone que la Policía Nacional está instituida para proteger a todas las personas residentes en

¹ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera- Sentencia de 13 de Julio de 1993, expediente 8163 Consejero Ponente: Juan de Dios Morales Hernández.

Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. El presidente de la República, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República, dirige la fuerza pública (artículo 189.3 CN) y le corresponde conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo cuando sea perturbado (artículos 189.4 y 213 y siguientes CN). A su vez, el gobernador es agente del presidente de la República para el mantenimiento del orden público (artículo 303 CN). En consonancia, el alcalde es la primera autoridad de policía del municipio y le corresponde conservar el orden público de éste, de conformidad con la ley y las instrucciones que reciba del presidente de la República y del gobernador (artículo 315.2 CN). La jurisprudencia, en vigencia del artículo 16 de la Constitución de 1886-que corresponde al citado artículo 2 CN- concluyó que estos deberes no implican que el Estado sea un “asegurador general” contra daños, tampoco entrañan una responsabilidad automática derivada exclusivamente de la afectación de un derecho y encuentran su límite en los recursos materiales y humanos de que disponen las autoridades para disuadir y, en últimas, garantizar la seguridad e integridad. Se trata, pues, de una falla relativa del servicio. Imputar responsabilidad al Estado con base en disposiciones generales como la contenida en el artículo 2 CN supondría la existencia de una obligación, en términos jurídicos, en la cual debe responder por todos los daños que sufran las personas. Esa norma contiene un deber general, del cual, de forma abstracta o general, no pueden derivarse directamente obligaciones resarcitorias. Si no fuese así, el Estado respondería siempre que una persona le cause daño a otra, con independencia de su intervención en el hecho, lo cual constituye, evidentemente, una distorsión que aleja al juez de la Administración de los fundamentos civiles de la responsabilidad extracontractual del Estado, para -en su lugar- ubicarlo en los predios ajenos de la responsabilidad política. En esta materia se requieren análisis más precisos soportados en normas destinadas a regular la responsabilidad, que impongan verdaderas obligaciones resarcitorias en términos civiles, y no estén fundados en disposiciones que fueron concebidas para establecer fines relacionados con la organización del Estado. Por tanto, las entidades públicas solo son responsables civilmente cuando con su acción u omisión causen un daño a otro (art. 2341 CC), pues solo en esos eventos puede surgir la obligación indemnizatoria.

CONSEJO DE ESTADO / SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / SECCIÓN TERCERA”. (SIC)

b) LA IMPUTACION DE ESE DAÑO A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

De acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, “no basta con que exista un daño antijurídico sufrido por una persona; es menester, además, que dicho daño sea imputable, vale decir, atribuido jurídicamente al Estado”. Y citando al profesor español GARCIA DE RENTERRIA, agrega la corporación que la imputación “es *un fenómeno jurídico consistente en la atribución a un sujeto determinado del deber de reparar un daño, en base a (sic) la relación existente entre aquél y éste*”.

En torno a este punto y con el propósito de distinguirlo del nexo causal, ha dicho la alta corporación:

“El supuesto más simple que cabe imaginar es, naturalmente el de la causación material del daño por el sujeto responsable. En tal caso, la

imputación de responsabilidad, en cuanto fenómeno jurídico, se produce automáticamente una vez que se prueba la relación de causalidad existente entre la actividad del sujeto productor del daño y el perjuicio producido. Las cosas no se producen siempre tan simplemente, sin embargo, y ello porque en materia de responsabilidad civil, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito penal, el objetivo último que se persigue no es tanto el de identificar a una persona como autora del hecho lesivo, sino el de localizar un patrimonio con cargo al cual podrá hacerse efectiva la reparación del daño causado. Esta finalidad garantizadora, que está en la base de todo sistema de responsabilidad patrimonial, produce con frecuencia una disociación entre imputación y causalidad. Probar que existe un nexo causal entre el hecho que constituye la fuente normativa de responsabilidad y el daño producido será siempre necesario para que la imputación pueda tener lugar y con ella pueda nacer la responsabilidad, pero la mera relación de causalidad entre el hecho (y su autor) y el daño no basta para justificar la atribución del deber de reparación al sujeto a quien la ley califica de responsable. Así ocurre, por lo pronto, cuando la responsabilidad se predica de personas jurídicas, en la medida en que éstas solo pueden actuar a través de persona física. En tales casos -y en todos aquellos en que la responsabilidad se configura legalmente al margen de la idea de culpa- la imputación no puede realizarse con base a (sic) la mera causación material del daño, sino que tiene que apoyarse, previa justificación de su procedencia, en otras razones o títulos jurídicos diferentes, ya sea la propiedad de la cosa que ha producido el daño, la titularidad de la empresa en cuyo seno ha surgido el perjuicio, la dependencia en que respecto del sujeto responsable se encuentra el autor material del hecho lesivo, o cualquier otra.

Pese a ello, queda claro que, para imponer al Estado la obligación de reparar un daño, es menester, que además de constatar la antijuricidad del mismo, el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un “título jurídico” distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, “la imputatio iuris”², además de la “imputatio facti”³.

Con esta orientación, es lógico concluir que la falla del servicio ha sido, en nuestro derecho, y continua siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al juez administrativo le compete —por principio— una labor de la acción administrativa del Estado y si la falta del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación administrativa a su cargo, no hay

² La imputatio iuris: es la atribución del hecho de las consecuencias jurídicas que le son propias en función de la actitud subjetiva del autor de la actitud interna del autor ante las normas.

³ La imputatio factis: es la atribución del hecho cometido a su autor como su obra se le imputa la parte objetiva externa del hecho y el mal que causa en el mundo exterior.

duda de que es ella el mecanismo mas idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual.

Sin perjuicio, claro está, de que, por razones jurídicas o por motivos de equidad, existan otros títulos de imputación excepcionales que determinan las diversas clases de responsabilidad sin falla, tal por ejemplo el desequilibrio ante la igualdad frente a las cargas públicas.

En este panorama se puede observar, como ya se dijo, cierta tendencia objetivizante, en cuanto al tratamiento del daño indemnizable se refiere del artículo 90 de la Constitución Política, y el mantenimiento de la falla del servicio como principal título de imputación del daño al Estado y, por lo tanto, la conservación de la regla general de la responsabilidad subjetiva.

En el caso en estudio, como quedé reseñado al abordar el punto sobre el daño antijurídico, no está demostrada la falla del servicio imputable a la entidad territorial demandada; luego no hay lugar a deducir responsabilidad extracontractual alguna para el Distrito de Santiago de Cali.

En concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, para que le sea atribuible al Estado, responsabilidad Administrativa por daños causados a particulares, se deben cumplir simultáneamente tres condiciones, a saber; **Daño a un bien jurídicamente tutelado, falla en el servicio por acción y omisión, retardo o irregularidad en su prestación y un nexo causal del cual se desprenda que el primero (daño) es consecuencia directa e inequívoca del segundo (omisión o inadecuada actuación).**

Por su parte, la entidad de derecho público, podrá ser exonerada, luego de argumentar con suficiencia la existencia de alguna de las siguientes causales: *Fuerza mayor, **culpa exclusiva de la víctima** o **culpa de un tercero**.* (lo resaltado es nuestro).

Finalmente, respecto de la demostración del punto de estudio, se observa que no se aportó medio de prueba alguno que permita establecer que un servidor público perteneciente al Distrito de Santiago de Cali hubiera sido el autor de las presuntas lesiones ocasionadas al señor JORGE ANDRES ALVAREZ LOPEZ, por el contrario la parte actora no aportó historia clínica ni el suficiente material probatorio para convalidar los hechos y pretensiones de la demanda a cargo de la Secretaria de movilidad Distrito de Santiago de Cali, donde la carga de la prueba la tiene el demandante.

7.- EN CUANTO A LOS PERJUICIOS RECLAMADOS

Se pretende el reconocimiento por parte del Distrito de Santiago de Cali de los perjuicios indemnización por los perjuicios sufridos, estos no están probados en el plenario, nos atenemos a lo probado en el transcurso del proceso.

En ese sentido el demandante no ha acreditado el daño y la relación de causalidad entre este y la falla de la entidad demandada, en consecuencia los perjuicios materiales, no pueden ser estimados y reconocidos máxime si se observa es que en el expediente, fuera de las afirmaciones que se hacen en la demanda, no aparece prueba alguna de que se hayan producido, y como ellos no se pueden presumir, al no haberse comprobado, no se puede hacer condenación por tal concepto.

Respecto a estos perjuicios el Consejo de Estado, Sección Tercera C.P D. Benjamín Jaramillo ha dicho:

Para que el daño sea resarcible o indemnizable, la doctrina y la jurisprudencia han establecido que debe reunir las características de cierto, concreto o determinado y personal.

9.- PRINCIPIO DE CONCAUSALIDAD: CAUSALES DE EXONERATIVAS:

Tradicionalmente la doctrina la jurisprudencia han manifestado que el demandado en un juicio de responsabilidad tiene, por norma general, la posibilidad de defenderse probando diligencia y cuidado, o inexistencia del nexo causal, o la existencia de una causal exonerativa de responsabilidad, comúnmente conocida causa extraña. Así, según el régimen de responsabilidad aplicable, el demandado tiene la posibilidad de escoger entre varias alternativas para exonerarse: si es dentro de un régimen subjetivo de responsabilidad, probar ausencia de culpa, inexistencia del nexo causal o una causa extraña.

Por el contrario, si es un régimen de responsabilidad objetiva, el demandado solo se podrá exonerar probando ausencia de nexo causal o la existencia de una causa extraña.

Por causal exonerativa de responsabilidad se entiende aquella causa que impide imputar determinado daño a una persona, haciendo improcedente, en consecuencia, la declaratoria de responsabilidad. En este sentido, las causales de exoneración impiden la imputación, en ocasiones porque es inexistente el nexo de causalidad (por ejemplo en el hecho del tercero como causa exclusiva), o en ocasiones demostrando que si bien el demandado por acción u omisión causó el daño, lo hizo llevado o coaccionado por un hecho externo, imprevisible e irresistible.

Las causales exonerativas de responsabilidad pueden liberar totalmente al

demandado de responsabilidad, cuando la fuerza mayor, el hecho del tercero y/o el hecho de la víctima son consideradas como la causa única exclusiva y determinante del daño. Pero también puede demostrarse que probada esa causal exonerativa su ocurrencia tuvo incidencia en la producción del daño junto con el actuar del demandado a título de concausalidad, evento en el cual la consecuencia no será, en principio, la exoneración total de responsabilidad sino que se está frente a una reducción en la apreciación del daño, es decir una reducción en la indemnización.

Se puede afirmar que la imputación que no ha pasado por el filtro de las causales exonerativas, es una imputación aparente, que se convierte en definitiva solo cuando supera este estudio sin verse alterada.

10.- CAUSALES EXONERATIVAS ESTUDIADAS POR LA DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA:

Como son: **LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO, EL HECHO DEL TERCERO Y EL HECHO DE LA VÍCTIMA.**

CARACTERÍSTICAS Y APLICACION:

A.- FUERZA MAYOR:

Eneccherus define la fuerza mayor diciendo que el “Acontecimiento cognoscible, imprevisible que no deriva de la actividad en cuestión, sino que en este sentido viene de fuera, y cuyo efecto dañoso no podía evitarse por las medidas de precaución que racionalmente eran de esperar⁴. De acuerdo con la doctrina francesa, “es un caso constitutivo de fuerza mayor el evento que presenta las tres características siguientes: exterioridad (respecto del demandado), imprevisibilidad (en su ocurrencia) e irresistibilidad (en sus efectos)”⁵.

En Colombia esta Figura fue definida legalmente por el artículo 1°. De la Ley 95 de 1890 que subroga el artículo 64 del Código Civil cuyo texto enuncia: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”⁶ Así las cosas, la fuerza mayor de acuerdo con la ley colombiana se entiende como sinónimo de caso fortuito

En lo que tiene que ver con la fuerza mayor, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha retomado lo establecido por la Corte Suprema de Justicia que al referirse a las

⁴ Citado por I.L CONCEPTION RODRIGUEZ, *Derecho de daños*, Bosch, 2ª edic. 1999, pag.85.

⁵ Chapus, *droit administrative general*, ediciones Montchrestein, 1997, p.1 122.

⁶ El Código Civil Argentino establece en su artículo 514: “Caso fortuito es el que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse”.

características que debe revestir un hecho para ser calificado de fuerza mayor ha dicho:

“Así pues, la cuestión del caso fortuito liberatorio o de fuerza mayor, al menos por norma general, no admite ser solucionada mediante una simple clasificación mecánica de acontecimientos apreciados en abstracto como si de algunos de ellos pudiera decirse que por sí mismo, debido a su naturaleza específica, siempre tienen tal condición, mientras que otros no. En cada evento es necesario estudiar las circunstancias que rodean el hecho con el fin de establecer si, frente al deber de conducta que aparece insatisfecho tiene las características que indica el Art. 1°. De la Ley 95 de 1890, tarea en veces dificultosa que una arraigada tradición jurisprudencial exige abordar con severidad” (SIC).

Esos rasgos por los que es preciso indagar, distintivos del caso fortuito o de fuerza mayor, se sintetizan en la imposibilidad absoluta de cumplir derivada de la presencia de un obstáculo insuperable unido a la ausencia de culpa del agente cuya responsabilidad se pretende comprometer (G.J. t XLII, página 54) y son, en consecuencia, los siguientes:

- A) Que el hecho sea **imprevisible**, esto es que en condiciones normales haya sido lo suficientemente probable para que ese agente, atendido su papel específico en la actividad que origina el daño, haya podido precaverse contra él. Aunque por lo demás, respecto del acontecimiento de que se trata, haya habido, como lo de ordinario para la generalidad de los sucesos, alguna posibilidad vaga de realización, factor este último con base en el cual ha sostenido la jurisprudencia que *“...cuando el acontecimiento es susceptible de ser humanamente previsto, por más súbito y arrollador de la voluntad que parezca, no genera el caso fortuito ni la fuerza mayor...”*⁷
- B) Que el hecho sea **irresistible** en el sentido estricto de no haberse podido evitar su acaecimiento ni tampoco sus consecuencias, colocando al agente-juzgado por el suceso así sobrevenido- en la absoluta imposibilidad de obrar del modo debido, habida cuenta que si lo que se produce es tan solo una dificultad más o menos acentuada para enfrentarlo, tampoco se configura el fenómeno liberatorio del que viene haciéndose mérito ⁸.

B.- CASO FORTUITO:

Como lo expone el profesor HINESTROSA⁹, esa es la conclusión a la que se

⁷ G.J. tomos LIV. Página 377, y CLVIII, pagina 63),

⁸ Corte Suprema de justicia, sala de casación civil, sentencia del 26 de noviembre de 1999, exp.5220

⁹ " F.HINESTROSA, tratado de las obligaciones I, Universidad Externado de Colombia, 2002, pag. 775.

llegue desde el punto de vista normativo, de regreso de un empeño generalizado en la jurisprudencia francesa retomado en nuestro medio, para caracterizar la fuerza mayor como el acontecimiento totalmente extraño a la actividad generadora del daño, y el caso fortuito como aquel suceso que ocurre dentro de la ejecución de alguna actividad.

No obstante la disposición legal que trata como sinónimos la fuerza mayor y el caso fortuito, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha hecho esfuerzos por diferenciar las dos figuras en el campo de la responsabilidad por riesgo excepcional y han predicado una tesis realista¹⁰.

La Jurisprudencia y la doctrina se refieren entonces al caso fortuito como sinónimo de "Causa desconocida", la cual si bien puede o no puede ser previsible o imprevisible, y en todos los casos es irresistible, se reputa como consustancia a la actividad en desarrollo de la cual no tiene la potencialidad de exonerar de responsabilidad en aquellos regímenes por riesgo excepcional proveniente de la realización de una actividad peligrosa. Se ha entendido que si la causa del daño no es externa a la actividad no existe en este sentido una causa extraña que tenga la consecuencia de exonerar de responsabilidad.

C.- HECHO DE UN TERCERO:

Esta causal de exoneración parte del supuesto inicial según el cual el causante directo del daño es un tercero ajeno a las partes intervinientes en el juicio de responsabilidad. No son terceras las personas a quienes además del demandado, la ley adjudica responsabilidad. No son terceras las personas a quienes además del demandado, la ley adjudica responsabilidad solidaria y que por ende resultan coobligados. Jurídicamente solo es tercero alguien extraño, por quien no se debe responder, es decir, no vinculado con el sujeto contra el que se dirige la acción resarcitoria.

La jurisprudencia contenciosa ha considerado que para que se presente la figura del **hecho del tercero** como casual de exoneración de responsabilidad, es necesario que confluyan los siguientes elementos: 1) debe ser un hecho exclusivo del daño producido, y 2) debe ser un hecho producido por circunstancias imprevisibles e irresistibles.

El hecho del tercero debe ser *causa exclusiva unida y determinante del daño* para que se convierta en exoneratorio de responsabilidad. El supuesto más común del hecho del tercero es aquel en el cual la participación del alguien extraño al demandante y al demandado fue la verdadera causa del daño, y en este sentido se configura la inexistencia del nexo causal. No obstante, también hay casos en los cuales el hecho es causado desde el punto de vista factico por el demandado quien ve determinada

¹⁰ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de marzo de 2000, exp. 11670. Citada en Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera de Fecha 27 de Noviembre de 2002, exp. 13990. M.P. MARIA ELENA GIRALDO.

su conducta por el actuar de un tercero, haciendo que el daño sea imputable a ese tercero de forma exclusiva, como en el caso de la legítima defensa cuando el daño producto de esa defensa se causa a alguien distinto de aquel cuya agresión se pretende repeler. En este último caso nos encontramos frente a una imposibilidad de imputación puesto que la defensa fue determinada por el hecho de un tercero agresor.

Ahora bien, en el evento en que el hecho del tercero aparezca junto con el actuar del demandado como concausa en la producción del daño, lo que se genera es una solidaridad entre ellos como coautores del daño tal como lo establece el artículo 2344¹⁹ del Código Civil, pudiendo la víctima perseguir por el total de la indemnización a todos o a cualquiera de ellos indistintamente.

Ha dicho el Consejo de Estado al respecto:

El concurso de conductas eficientes en la producción de un daño, provenientes de personas distintas a la víctima directa, genera obligación solidaria y, por lo tanto, el daño puede exigir la obligación de indemnización a cualquiera de las personas que participaron en la producción del daño (arts.2344 y 1568²⁰ Código civil).

Por consiguiente, cuando la conducta del tercero no es única ni exclusiva sino coparticipada en forma eficiente y adecuada con la del demandado(s), el afectado puede pedir la declaratoria de responsabilidad de uno o de todos los deudores solidarios (Art.1571 ibidem). Esta es la situación por la cual la coparticipación del tercero no es constitutiva de exonerante de responsabilidad, para que la conducta del tercero fuera exonerante de responsabilidad; para que la conducta del tercero fuera exonerante se requerirá su exclusividad y, además, que fuera determinante en la producción del daño.

Por otra parte, el hecho del tercero debe tener las características de toda causa extraña y en consecuencia debe ser irresistible e imprevisible puesto que si se prueba que pudo haber sido previsto y/o evitado por el demandado que así no lo hizo, le debe ser considerado imputable conforme al principio según el cual *"no evitar un resultado que se tiene la obligación de impedir, equivale a producirlo"*.

Respecto de la existencia de estas dos características que deben estar presentes ha dicho la jurisprudencia:

[...] Se recuerda que el hecho del tercero para valer como causal exonerativa de responsabilidad debía ser, en el *sub judice*, irresistible e imprevisible para el Estado Colombiano, en razón a que si estaba en condiciones de preverlo o de resistirlo, como en efecto lo estuvo y a pesar de ello no lo hizo, o lo hizo deficientemente, tal comportamiento culposos administrativo que vincula su conducta con el referido daño, bien puede considerarse como causa generadora de esta, sin que en tales condiciones resulte interrumpida la relación de causalidad anteriormente advertida.

Se hace notorio que el hecho del tercero deba ser imprevisible puesto que si puede ser prevenido o evitado por el ofensor, le debe considerado imputable conforme al principio según el cual *“no evitar un resultado que se tiene la obligación de impedir, equivale a producirlo”*. Y debe ser irresistible puesto que si el causante del daño puede válidamente oponerse a él y evitarlo, luego no lo puede alegar como causal de exoneración.

En este orden de ideas, resulta evidente como para la jurisprudencia del Consejo de Estado, el hecho del tercero debe revestirse de los requisitos de exterioridad, imprevisibilidad e irresistibilidad para que pueda ser considerado como una causa extraña que pueda impedir la imputación.

C.- CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA:

CONSEJO DE ESTADO / SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA / SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinte (2020)

Radicación número: 76001-23-31-000-2009-00439-01(58204)

Actor: JOSÉ HUMBERTO CASTRO MARTÍNEZ Y OTROS

Demandado: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI ESP Y OTRO

Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

“Frente a la culpa exclusiva de la víctima, esta Corporación ha sostenido que, para que se configure, se debe probar no solo la participación de la víctima en la producción del daño sino que, además, *“que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta”*¹¹.

En este punto, debe advertirse que el menor para el momento del accidente contaba con 11 años de edad¹², por lo que es posible entrar a estudiar si su actuar fue la causa exclusiva y determinante del daño, pues no es aplicable lo prescrito en el artículo 2346 del Código Civil¹³, toda vez que, la imposibilidad de predicar dolo o culpa se encuentra instituida para los menores de 10 años y los dementes.

Además, no puede pasarse por alto que esta Sección ha establecido que en aquellos eventos en los que se estudia la responsabilidad por actividad peligrosa, se ha considerado que los padres del menor lesionado son víctimas indirectas, por lo que su

¹¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 25 de julio de 2002, expediente 13.744.

¹² De acuerdo con el registro civil de nacimiento que obra en el expediente.

¹³ “Artículo 2346. Los menores de diez años y los dementes no son capaces de cometer delito o culpa; pero de los daños por ellos causados serán responsables las personas a cuyo cargo estén dichos menores o dementes, si a tales personas pudiere imputárseles negligencia”. Si bien el mencionado artículo refiere a la responsabilidad que tiene los menores frente a terceros, lo cierto es que esa lógica también resulta aplicable para los eventos en los que *“aún no ha completado su desarrollo psicológico y fisiológico conocer las normas y actuar de conformidad con lo que ellas señalan”*. Al respecto ver, sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre de 2016, expediente, 34.639, sentencia del 20 de febrero de 2014, expediente 29.723, reiterada en sentencia del 11 de mayo de 2017, expediente 40.590.

actuar negligente también puede contribuir a la causación del daño.

“Específicamente se observa que las víctimas del hecho no sólo fueron las directas (quienes fallecieron), el niño de más de diez años y la niña menor de estos años, sino también algunos de los demandantes como son los padres (víctimas indirectas). Aún bajo el supuesto entendimiento de que el artículo 2.346 del C. C se extiende a los menores de diez años cuando son causantes de su propio daño, se advierte que la conducta de los padres, VÍCTIMAS INDIRECTAS, fue negligente cuando permitieron que sus hijos menores tomaran un bus a sabiendas de que la vía en la que quedaba la escuela era de tránsito de automotores. Por consiguiente la causa eficiente y determinante en la producción de las muertes demandadas es imputable directamente a los menores fallecidos e indirectamente a sus padres, quienes son los guardadores naturales legales de los mismos, como ya se explicó. Lo anterior permite deducir que si bien la ubicación de la escuela, y las omisiones en señalización de la vía y la zona escolar son hechos comprobados, ellos no fueron la causa directa y determinante del daño, cuya indemnización se reclama”¹⁴ (subrayado del original).

Finalmente, es importante aclarar que la jurisprudencia ha sostenido que los riesgos que implica la conducción de energía eléctrica es conocida por la generalidad de las personas¹⁵.

Descendiendo al caso concreto, las demandadas advirtieron que la culpa exclusiva de la víctima se configuró: **i)** por el actuar imprudente de la víctima, **ii)** por la omisión de sus padres en el cumplimiento de sus deberes de cuidado, protección y vigilancia de su hijo y, además, **iii)** porque la madre conociendo del riesgo que existía en la casa del amigo le permitió ir allá.

Así las cosas, de acuerdo con lo relatado en la demanda, el accidente ocurrió mientras el menor Castro Ruiz se encontraba jugando con dos amigos de 10 y 6 años, momento en el que decidió pararse sobre un muro ubicado en la terraza de la vivienda y alzar su mano derecha, actuación que resultó imprudente y fue determinante en la producción del daño.

En las condiciones descritas, la Sala encuentra que la maniobra que realizó la víctima directa resultó determinante en la producción del daño, pues fue su actuar imprudente el que generó el arco eléctrico y produjo las lesiones por cuya indemnización se demanda en el presente proceso.

En ese orden de ideas, para la empresa de energía el accidente resultó imprevisible e irresistible, pues como ya se advirtió, la entidad no tenía manera de enterarse que las redes estaban tan cerca de la vivienda y, mucho menos, prever que alguien, a pesar del riesgo, pudiera subirse sobre un muro y alzar una de sus manos.

¹⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 25 de julio de 2002, expediente 13811.

¹⁵ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 15 de agosto de 2002, expediente 14.357.

Además del actuar de la víctima directa, también contribuyó a la causación del daño el incumplimiento de sus padres frente al deber de protección y cuidado que debían ejercer sobre su hijo, máxime si toda la comunidad conocía de los riesgos que generaban el estar en la vivienda donde ocurrió el accidente.

El mencionado deber encuentra su configuración legal en los artículos 3 y 6 del Decreto 2737 de 1989 –*Código del Menor*-, en los que se consagró que “[t]odo menor tiene derecho a la protección, al cuidado y a la asistencia necesaria para lograr un adecuado desarrollo físico, mental, moral y social; estos derechos se reconocen desde la concepción” y “[s]on deberes de los padres, velar porque los hijos reciban los cuidados necesarios para su adecuado desarrollo físico, intelectual, moral y social”.

Igualmente, la Corte Constitucional se ha referido sobre este tema y ha señalado que es deber de los padres el cuidado personal de sus hijos:

“[J]ustamente, el artículo 253 del Código Civil indica que ‘toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos’. Significa lo anterior que la progenitura responsable parte de la base del ejercicio de la custodia y el deber de cuidado personal de los hijos en cabeza de ambos padres, y solo por vía excepcional, a uno de éstos”¹⁶.

Finalmente, esa misma Corporación ha señalado que dentro de las obligaciones de los padres se encuentra la obligación de cuidado y custodia sobre sus hijos:

“En ese conjunto de derechos que conforman la autoridad paterna, está el cuidado personal del hijo, que consiste, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en ‘el oficio o función, mediante la cual se tiene poder para criar, educar, orientar, conducir, formar hábitos y disciplinar la conducta, siempre con la mira puesta en el filio, en el educando, en el incapaz de obrar o de autorregular en forma independiente su comportamiento.’ (Cfr. Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente. Dr. José Alejandro Bonivento Fernández, marzo 10 de 1987).

“Este cuidado personal, tal como lo ha definido la Corte Suprema de Justicia, hace parte integral de los derechos fundamentales del niño, consagrados en el artículo 44 de la Constitución. Por tal razón, esta Sala sostiene que, en principio, esos derechos, en especial el del cuidado personal, no pueden delegarse en terceros, ya que ellos nacen de la especialísima relación que surge entre padres e hijos”¹⁷.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, en el presente asunto se observa que los padres del menor Castro Ruiz no cumplieron con sus deberes de cuidado y custodia, pues permitieron que su hijo fuera a una vivienda en la que se conocía de

¹⁶ Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.

¹⁷ Corte Constitucional, sentencia T-500 del 29 de octubre de 1993.

antemano el riesgo al que iba a estar expuesto en razón de la cercanía de las redes eléctricas, pues no se puede perder de vista que de acuerdo con los testimonios, los demandantes residían en ese lugar hace aproximadamente 20 años, lo que permite establecer que conocían tanto las casas del sector como su cercanía con las redes eléctricas.

Además, la señora Teresa de Jesús Cano Valencia, en su testimonio, indicó que el muro de la terraza era muy bajito, lo que exigía tener un mayor cuidado sobre el menor y cerciorarse que siempre hubiera un adulto responsable que velara por sus intereses.

A lo anterior, debe agregarse que, de acuerdo con el testimonio de la señora Shirley Milena Morales, el menor, para el momento del accidente, se encontraba sin la vigilancia de un adulto responsable, pues solo estaba en compañía de dos niños, de 10 y 6 años, lo que a todas luces resulta reprochable, pues, contrario a lo expuesto por el Tribunal, si los niños hubieran estado bajo el cuidado de un adulto responsable el accidente no hubiera ocurrido, toda vez que se le hubiera impedido al menor Castro Ruiz que realizara la maniobra peligrosa que generó las lesiones.

Además, los padres de la víctima no podían perder de vista que la persona que iba a cuidar a su hijo tenía, además de los dos niños, de 10 y 6 años, un bebé de 5 meses, lo que implicaba que su hijo no iba a estar bajo una supervisión que le impidiera realizar alguna maniobra que pudiera afectar su integridad, razón por la que asumieron el riesgo al dejar a su hijo bajo esas condiciones, máxime si toda la comunidad conocía el riesgo que generaba estar en esa terraza, dada la cercanía de las redes.

En virtud de lo anterior, para la Sala el daño se configuró por la imprudencia del menor y por el incumplimiento de los deberes de vigilancia y control por parte de sus padres, situaciones que exoneran de responsabilidad a EMCALI en el presente asunto, razón por la que se revocará la sentencia recurrida y, en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda.

En ese orden de ideas, la Sala se releva de estudiar el motivo de inconformidad planteado por los demandantes en cuanto a la condena en costas a la demandada, toda vez que, la decisión será revocada” (SIC).

11.- ACREDITACIÓN DEL HECHO DE LA VÍCTIMA

Es de tenerse en cuenta que la maniobra realizada por la víctima directa resultó determinante en la producción del daño, pues fue su actuar imprudente el que generó la descarga eléctrica y produjo las lesiones por cuya indemnización se demanda en el presente proceso. En ese orden de ideas, para el Distrito de Santiago de Cali resultó imprevisible e irresistible, pues como queda demostrado el distrito no tenía manera de enterarse que debido a construcciones irregulares éstas estaban tan cerca de la vivienda y, mucho menos, prever que alguien, a pesar del riesgo, pudiera al estar desarrollando labores domésticas como lo es la de lavar la ropa, por la cercanía de la red eléctrica recibe una descarga de alta tensión (12.000 voltios). Además del actuar

de la víctima directa, también contribuyó a la causación del daño el incumplimiento de los propietarios de la vivienda frente al deber de cumplir con las normas en materia de urbanismo y de RETIE en la vivienda donde ocurrió el accidente, quienes debían tomar las medidas de prevención necesarias para evitar riesgos de contacto con redes energizadas, es por ello que el daño se configuró por la imprudencia de la señora BETSY TATIANA PRECIADO CORTES y por los deberes de cumplimiento de las normas en materia urbanística por parte de los copropietarios, situaciones que exoneran de responsabilidad al distrito de Santiago de Cali en el presente asunto, por lo que solicito a su señoría negar las pretensiones en contra del Distrito de Santiago de Cali.

Su señoría respecto a la responsabilidad de la Administración Distrital, originada en el presunto daño antijurídico, en la omisión del deber constitucional y legal por parte de la Secretaría de Seguridad y Justicia Área Control a Construcciones, al sustraerse de la obligación de Vigilancia y Control, debo decir, al respecto, que se acompaña medio de prueba que corrobora que el daño ocasionado a los demandantes por las lesiones de la señora BETSY TATIANA PRECIADO, sufrida el 31 de Diciembre del 2021, obedece a un tercero ajeno al Distrito de Santiago de Cali como lo es los propietarios de la construcción dada en arriendo a la señora BETSY TATIANA PRECIADO la cual no contaba con la licencia urbanística y demás requisitos en materia de energía Normas RETIE establecidos para las obras de construcción toda vez que las redes eléctricas incumplieron las distancias mínimas de seguridad por la intervención del tercero, al construir el segundo y tercer piso sin ningún tipo de permiso e incumpliendo las distancias de seguridad de las redes eléctricas; además, sin que hubiera solicitado la reubicación de las redes, lo que generó que todas las personas que estuvieran en la vivienda se vieran expuestas al riesgo de manera permanente, es por ello quienes son los llamados a responder como litisconsorcio necesario por pasiva por los resultados dañosos, debiendo indemnizar entonces a los demandantes de llegar a prosperar las pretensiones de la demanda conforme al material probatorio recaudado a lo largo del proceso y probados por el despacho.

14.- VINCULACION DE LLAMAMIENTO EN GARANTIA A LA COMPAÑIA DE SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA:

Su Señoría, solicito respetuosamente sea llamado en garantía la Compañía de Seguros ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, para que se haga parte en este proceso, a fin de que concurra al pago total o parcial de los perjuicios que se declaren como probados y por los cuales se pueda condenar al Distrito de Santiago de Cali, pues es esta la que le asiste de ser probado los hechos llamada a responder por las lesiones ocasionadas al señor JORGE ANDFRES ALVAREZ LOPEZ.

Su señoría en el evento de concederse las pretensiones al demandante, le solicito de la manera más respetuosa que una vez probada la causal de exoneración de responsabilidad en donde se pudo probar que las lesiones sufridas por el señor **JORGE ANDFRES ALVAREZ LOPEZ.**, le será imputable materialmente siempre y

cuando se acredite que el comportamiento de la persona lesionada o afectada (hecho de la víctima) fue decisivo, determinante y exclusivo en la producción del daño, estas sean compartidas con la Compañía de seguros ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.

15.- FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.

Artículo 29 de la Constitución Política: *“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. (...) Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. (...). En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.(...). Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.(...). Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.*

Respecto a los fundamentos legales y jurisprudenciales. me remito a lo expuesto en el acápite de excepciones, en donde claramente se detalla la falta de legitimación en la causa por pasiva y la ausencia de responsabilidad de mi representada. Toda vez que no suministra el servicio de energía eléctrica, no se le puso de presente riesgo alguno respecto del cableado cercano al inmueble la que no contaba con licencia de construcción.

16.- FUNDAMENTO NORMATIVO:

Mediante el DECRETO EXTRAORDINARIO No. 411.0.20.0516 DE 2016 "Por el cual se determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias", se definieron las funciones de la Secretaría de Movilidad de la siguiente forma:

Función:

La Secretaría de Movilidad tiene como propósito garantizar mejores condiciones en la movilidad de personas y bienes en el área urbana y rural, dando prioridad a la movilidad no motorizada (peatón y bicicleta) y al transporte público optimizado sobre el transporte privado, en el marco de criterios de sostenibilidad ambiental y socio-económica, seguridad vial y accesibilidad universal. (Decreto 516 de 2016)

La Secretaría de Movilidad tendrá la siguiente estructura:

- 1. Despacho del Secretario.**
- 2. Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial.**
- 3. Subsecretaría de Servicios de Movilidad.**
- 4. Oficina de Contravenciones.**
- 5. Unidad de Apoyo a la Gestión.**

Funciones:

La Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial tendrá por funciones, las siguientes:

- 1 Estructurar, ejecutar y hacer seguimiento a los Planes de Acción relacionados con accesibilidad universal, transporte no motorizado, transporte de pasajeros en todas sus modalidades, y transporte de mercancías.
2. Planear y ejecutar todos los aspectos relacionados con la implementación y utilización de dispositivos de regulación del tránsito, e implementar tecnologías aplicadas a la gestión inteligente de la movilidad en todos sus componentes.
3. Aprobar los Planes de Manejo de Tránsito y verificar su correcta implementación.
4. Planear y ejecutar todos los aspectos relacionados con la implementación y utilización de la señalización, demarcación y semaforización del Municipio.
5. Elaborar los estudios técnicos, formular las estrategias, planes y programas en materia de seguridad vial, con el propósito de reducir la accidentalidad, la contaminación ambiental y promover el mejoramiento del tránsito.
6. Elaborar los estudios técnicos y los documentos técnicos de soporte para la implementación de normas y medidas para la regulación y la optimización del tránsito y transporte en el Municipio.
7. Diseñar, presupuestar y ejecutar los proyectos de ingeniería de tránsito, transporte y seguridad vial que se requieran en la red vial del Municipio.
8. Planear y ejecutar todos los aspectos relacionados con la implementación y utilización de la Política de estacionamiento del Municipio.

9. Formular e implementar ordenamientos viales mediante la reglamentación de sentidos viales, utilización de carriles, velocidad de operación, señalización vertical y horizontal, semaforización, reglamentación de tránsito de los diversos tipos de vehículos, estacionamientos, de cargue y descargue de mercancías, vías peatonales, terminales de carga y pasajeros, y terminales y paraderos de buses.
10. Elaborar los estudios técnicos, económicos y jurídicos para los proyectos objetos de contratación que sean responsabilidad de la Subsecretaría en cumplimiento de las metas fijadas en el Plan de Desarrollo Municipal.
11. Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignados acordes con su competencia.

La Subsecretaría de Servicios de Movilidad tendrá por funciones, las siguientes:

- 1 Ejercer el control y vigilancia para que los usuarios del Sistema de Infraestructura Vial y de Transporte cumplan con las normas de tránsito y transporte vigentes.
2. Controlar el Transporte Público Urbano, Rural, intermunicipal de Pasajeros, carga y mixto conforme las competencias de la administración municipal.
3. Realizar el Registro Único Nacional de Transito conforme a la normatividad vigente.
4. Implementar estrategias para la apropiación de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) en materia de transporte y tránsito, en articulación y coordinación con las políticas municipales y nacionales, en coordinación con el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
5. Implementar, integrar y mantener recursos tecnológicos para el control de la operación.
6. Implementar medidas para regulación y control de tránsito para eventos especiales en las vías públicas.
7. Elaborar los estudios técnicos, económicos y jurídicos para los proyectos objetos de contratación que sean responsabilidad de la Subsecretaría en cumplimiento de las metas fijadas en el Plan de Desarrollo Municipal.
8. Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas acordes con su competencia.

La Oficina de Contravenciones tendrá por funciones, las siguientes:

1. Asesorar y proferir criterios jurídicos en materia de interpretación de las normas de transporte y tránsito en concordancia con los lineamientos que rigen sobre la Alcaldía de Santiago de Cali 35

materia y las directrices establecidas por el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública.

2. Controlar, vigilar y realizar el seguimiento a la aplicación de las normas y políticas en los procedimientos jurídicos de tránsito y transporte y recuperación de cartera por infracciones de tránsito y de transporte.

3. Adelantar el procedimiento de cobro persuasivo y coactivo de las multas de tránsito y de transporte, de conformidad con la ley.

4. Custodiar los expedientes de cobro, garantizando su seguridad, especialmente la de los documentos generadores de la obligación.

5. Resolver procesos que se adelantan por vulneración a las normas de tránsito.

6. Realizar y hacer seguimiento al registro de infractores en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito - SIMIT.

7. Proyectar los actos administrativos para la implementación de las normas y medidas para la regulación y la optimización del tránsito y el transporte, con sustento en los estudios técnicos respectivos.

8. Adelantar los procesos administrativos sancionatorios en materia de transporte público de conformidad con las normas.

9. Elaborar los estudios previos para adelantar los procesos contractuales a cargo del organismo.

10. Ejercer las funciones de inspecciones de tránsito conforme al Código Nacional de Tránsito y otras disposiciones de orden nacional, departamental o municipal, según sea el caso.

11. Adelantar las actuaciones encaminadas a lograr el cobro efectivo de las sumas que le adeuden a la Secretaría, con las excepciones legales, desarrollando las labores de cobro persuasivo y adelantando los procesos de jurisdicción coactiva en las condiciones que señale la ley.

12. Realizar la defensa judicial y extrajudicial de la Secretaría, según los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública.

13. Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas acordes con su competencia.

17.- PROPOSICION DE EXCEPCIONES CONTRA A LAS PRETENSIONES DEL DEMANDANTE:

INEPTA DEMANDA POR AUSENCIA DE PRUEBAS:

Su señoría del material probatorio no se ha determinado con prueba documental como lo es la historia clínica que acredite las lesiones físicas y psicológicas padecidas por el demandante.

AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD POR PARTE DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.

La falla endilgada al ente territorial se circunscribe a una supuesta extralimitación de los servidores públicos agentes de movilidad la cual debe ser probada como generadora del daño.

Del material probatorio allegado al expediente se observa que al municipio de Santiago de Cali un video no es suficiente para probar quien causo el daño

INNOMINADA O GENÉRICA.

Solicito muy respetuosamente al momento de proferir sentencia, se sirva declarar de oficio todos los hechos exceptivos que sean advertidos y probados en el curso del proceso y que resulten favorables a la entidad que represento.

18.- PRUEBAS DE LA OPOSICIÓN Y DE LAS EXCEPCIONES DE FONDO:

Con el objeto de probar: Las excepciones propuestas; al igual que los fundamentos facticos y jurídicos de la defensa, muy respetuosamente solicito al señor juez se decreten y practiquen las siguientes pruebas:

1. DOCUMENTAL:

Téngase como documental las aportadas totalmente con la demanda y anexo a ellas las siguientes:

1. Copia Póliza No.420 – 80 -994000000109, de responsabilidad Civil Extracontractual de la Aseguradora Solidaria de Colombia. Nit.860.524.654-6.
2. Certificado de Existencia y Representación Aseguradora Solidaria de Colombia entidad cooperativa, Nit.860.524.654-6, fecha de expedición 13 de Junio del 2022. (ANEXO 4).
3. Radicado No.202241610100019294 de fecha 03-05-2022.
4. Respuesta informe Orfeo radicado No.202241520100041734 de fecha 2022-07-25 allegado de movilidad.
5. Orden de servicio para las fechas 23 de junio 2019.

19.- LLAMAMIENTO EN GARANTIA:

En escrito separado a esta contestación de demanda se está efectuando llamamiento en garantía a la Aseguradora Solidaria de Colombia entidad Cooperativa, Nit.860.524.654-6.

20.- ANEXOS

Honorable Juez a la presente contestación la acompaño con:

- Los relacionados en el acápite de pruebas.
- Poder para actuar dentro de la presente Acción, otorgado por el Doctora MARIA DEL PILAR CANO STERLING Directora Jurídico de la Alcaldía de Santiago de Cali, en el que sustituye en mi el poder especial a él conferido por el Dr. JORGE IVAN OSPINA GOMEZ, en su calidad de Alcalde y por tanto representante legal del Municipio de Santiago de Cali, acompaño de una copia de la escritura pública contentiva de dicho poder especial y de los documentos que prueban la elección y posesión del Señor Alcalde y el nombramiento y posesión de la doctora MARIA DEL PILAR CANO STERLING .

21.- NOTIFICACIONES:

Las del señor Alcalde, se recibirán al Correo electrónico de notificación alcaldía de Cali- E-mail: notificacionesjudiciales@cali.gov.co

Autorizo notificarme a mi correo electrónico personal: E-mail: luzmaga1986@hotmail.com.ar

Sírvase Señor Juez reconocer personería jurídica a la apoderada del Distrito de Santiago de Cali.

Del señor juez,

Atentamente



LUZ MARY GONZALEZ AGUIRRE
C.C. 31.940.570 DE CALI VALLE
T.P. No. 123826 del C. S. J.